

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11427		Concepto: RESOLUCION No. 3066 DE FECHA 10 DE SEP DE 2025 POR LO CUAL SE ORDENA LA REVOCATORIA DIRECTA DENTRO DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA No 4767-2013		Fecha: 31/10/2025 id de contabilizacion 25147	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-85-15-0006		E: 4767 2013 R: 9027 2014 REVOCATORIA DIRECTA RES No. 3066 DE SEP 10 DEL 2025	0.00	821,330.00	
	17292430 9547196 EDUARDO MERCHAN ROJAS				
1-3-86-14-0004		E: 4767 2013 R: 9027 2014 REVOCATORIA DIRECTA RES No. 3066 DE SEP 10 DEL 2025	821,330.00	0.00	
	17292430 9547196 EDUARDO MERCHAN ROJAS				
Totales :			821,330.00	821,330.00	

LUZ STELLA GUERRERO SILVA

CONTRATISTA

LUZ STELLA GUERRERO SILVA

CONTRATISTA

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Revisado

Contabilizado

Aprobado

"De acuerdo con el concepto 2021-0095 del CTCP y la autorización mediante radicado 2025 - IE - 18574 de la Oficina Asesora de Control Interno de la SDS / FDS, los documentos no llevan firma puesto que son producidos por usuarios habilitados del ERP Contable y aceptados a través del gestor documental Ágilsalud"

Resolución No. 3066 del 10 de septiembre de 2025, por la cual se ordena de oficio una revocatoria directa 4767-2013

RESOLUCIÓN No. 3066 DE 10 de septiembre de 2025

“Por la cual se ordena la revocatoria directa dentro de la investigación administrativa
4767-2013”

LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

En uso de sus facultades Reglamentarias y en especial las conferidas por el Decreto Distrital 507 de 2013, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá DC, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio radicado con el No. 142336 de fecha 30/08/2013, proveniente del Hospital Rafael Uribe Uribe, se informa una serie de hallazgos que puede conducir a abrir investigación administrativa de carácter sanitario en contra del señor EDUARDO MERCHAN ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.292.430 y la señora MARIBEL LAVAO CESPEDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.825.947, en calidad de propietarios y/o responsables del establecimiento denominado RESTAURANTE EL CANDELAZO ARDIENTE, ubicado en la DG 45 F SUR 16 81 de esta ciudad, por la presunta violación a la normatividad higiénico-sanitaria dentro del ya mencionado establecimiento.

2. La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, mediante auto del 12/05/2014, formuló pliego de cargos en contra de las partes investigadas y se procedió enviar la citación para realizar la notificación personal del acto administrativo, mediante oficio con radicado 2014-EE-75684 de fecha 11/08/2014, sin embargo, esta última fue devuelta al remitente con causa “NS”, según constancia emitida por la empresa de Servicios Postales Nacionales. Así pues, se procedió mediante oficio radicado No. 2014-EE-86737 de fecha 17/09/2014, a enviar notificación por aviso con copia adjunta del pliego de cargos, sin embargo, esta última fue devuelta al remitente, según constancia emitida por la empresa de Servicios Postales Nacionales.

3. Que finalizado el término de quince (15) días, que tenía para la presentación de descargos, la parte investigada no los presentó, guardó silencio y no ejerció su derecho de contradicción.

4. Que mediante resolución 9027 de fecha 20/11/2014, se decidió de fondo la investigación administrativa No. 4767-2013, sancionando al señor EDUARDO MERCHAN ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.292.430, con una multa de OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 821.330), suma equivalente a 40 salarios mínimos legales diarios vigentes; y se procedió enviar la citación para realizar la notificación personal

Resolución No. 3066 del 10 de septiembre de 2025, por la cual se ordena de oficio una revocatoria directa 4767-2013

del acto administrativo, mediante oficio con radicado 2015-EE-4598 de fecha 23/01/2015, sin embargo, esta última fue devuelta al remitente con causa “NR”, según constancia emitida por la empresa de Servicios Postales Nacionales. Así pues, se procedió mediante oficio radicado No. 2015-EE-25841 de fecha 15/04/2015, a enviar notificación por aviso con copia adjunta de la resolución sanción, sin embargo, esta última fue devuelta al remitente con causa “cerrado”, según constancia emitida por la empresa de Servicios Postales Nacionales.

5. Que mediante derecho de petición de fecha 22/08/2025, el señor EDUARDO MERCHAN ROJAS, manifiesta fallas de procedimiento ya que la resolución 9027 de noviembre 20 del 2014, prescribió o caduco.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Este Despacho revisó integralmente la presente investigación administrativa para determinar si en la misma se expidió la decisión de fondo que impuso la sanción dentro de los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, es decir, dentro de los 3 años siguientes a la ocurrencia del hecho u omisión que la originó, y si la misma fue notificada dentro de este mismo término al investigado, so pena de haber operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria.

En virtud de lo anterior, este despacho procede a analizar la actuación administrativa surtida dentro del proceso sancionatorio No. 4767-2013, y a exponer los motivos por los cuales resulta procedente la revocación de todos los actos administrativos proferidos dentro de este, con el consecuente archivo del expediente.

Para ello, se exponen básicamente el siguiente argumento: la indebida notificación de la resolución No. 9027 de fecha 20/11/2014.

Se tiene entonces, que el acto administrativo, fue expedido dentro de los 3 años siguientes a la verificación de los incumplimientos de las condiciones higiénico - sanitarios, evidenciados en la visita del día 15/08/2013, acto que atendió los preceptos del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Sin embargo, evidencia el Despacho que la Resolución 9027 de fecha 20/11/2014, no fue notificada de forma efectiva; y efectuados los cálculos de los términos procesales, se avizora que para el caso en concreto la actuación caducaría, teniendo que ser corregida para subsanar todos los posibles yerros y con ello atender al debido proceso. Hecho que sin lugar a dudas vislumbra que no podría cumplirse con el deber consagrado en el artículo 52 de Ley 1437 de 2011, que establece que no es suficiente la expedición del acto, sino que es necesaria su notificación, por tanto, en el presente caso se configura el fenómeno jurídico de la caducidad.

Resolución No. 3066 del 10 de septiembre de 2025, por la cual se ordena de oficio una revocatoria directa 4767-2013

Todas las irregularidades advertidas dentro del trasegar procesal atentan contra el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a los investigados; y así lo ha dicho la Corte Constitucional en su jurisprudencia:

“6.75. El artículo 209 de la Constitución consagra el principio de publicidad en la función administrativa. Al respecto, este Tribunal ha señalado que dicho axioma se concreta en dar a conocer, a través de medios idóneos, las actuaciones a (i) las partes y terceros interesados en las mismas para garantizar sus derechos de contradicción y defensa, así como a (ii) toda la comunidad a fin de asegurar la transparencia y participación ciudadana, salvo en aquellos casos en los cuales la ley lo prohíba por tratarse de trámites sometidos a reserva.

6.76. Sobre el particular, esta Corporación ha explicado que la satisfacción del principio de publicidad, considerado como un mandato de optimización que “depende de las posibilidades fácticas y jurídicas concurrentes”, es un deber del legislador, el cual tiene un amplio margen de configuración para determinar los medios adecuados para cumplir con dicho axioma en los términos del artículo 150.23 de la Carta Política.

6.77. Una de las formas en las que se concreta el principio de publicidad es a través de las notificaciones y las comunicaciones de los actos administrativos, pues por medio de ellas se pone en conocimiento de los sujetos interesados las decisiones emanadas de las autoridades, y comienzan a contabilizarse los términos para su ejecutoria y la interposición de los recursos respectivos.

6.78. En este sentido, esta Corte ha expresado que la satisfacción del principio de publicidad es de suma importancia para salvaguardar el derecho al debido proceso, porque de su correcta optimización depende que los individuos tengan la posibilidad de conocer las decisiones que los afectan o benefician y, por consiguiente, estén en la capacidad de determinar las acciones que estimen pertinentes para gestionar sus intereses, ya sea por la misma vía administrativa o a través de los medios judiciales”.

Se concluye entonces que la actuación administrativa desarrollada dentro del proceso sancionatorio No. 4767-2013, presentó una serie de falencia en cuanto a la notificación del acto administrativo arriba analizado, además de que el tiempo transcurrido y el estado de cosas actual hacen imposible proseguir con la ejecución atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 CPACA.

En ese orden de ideas, al no haberse notificado la Resolución que resuelva la actuación administrativa dentro de los 3 años siguientes a la ocurrencia de los hechos que originaron la investigación administrativa, este Despacho debe dejarla sin efecto, bajo la figura de la revocatoria directa como quiera que de la misma no se puede predicar fuerza ejecutoria, y su notificación no se produjo en los términos señalados en la Ley, configurándose la causal 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Resolución No. 3066 del 10 de septiembre de 2025, por la cual se ordena de oficio una revocatoria directa 4767-2013

En relación con la figura jurídica de la revocatoria directa, la Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de tres de septiembre de 2020, Radicación 17001-23-33-000-2017-00100, sostiene: (...)

“Como se infiere de estas formulaciones jurídicas, la revocatoria directa consiste en una herramienta propia de las autoridades en sede administrativa y sin validación judicial previa, que puede ser desatada de oficio o a petición de parte, consistente en la modificación o cambio sustancial de las decisiones en firme que se han adoptado como manifestación unilateral de la respectiva entidad pública y que han creado situaciones jurídicas generales o particulares, siempre que éstas se acompasen con una o más causales o eventos de procedencia previstos en el artículo 93 del CPACA, esto es: «i) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, ii) cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, y iii) cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.».

Acerca de ello, se resalta que para la procedencia de la revocatoria directa es indispensable que la administración determine cuál es la causal de aquellas contenidas en el artículo 93 ejusdem que la habilita para modificar una situación jurídica consolidada por esta misma, (...).

Es decir, la revocatoria directa puede entenderse como una prerrogativa de la administración para enmendar sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, cuando atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona, acudiéndose en el presente caso a esta última causal.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la revocatoria directa de la Resolución 9027 de fecha 20/11/2014, proferida dentro de la investigación administrativa higiénico-sanitaria 4767-2013, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la parte investigada informándole que, de conformidad con lo señalado en los artículos 95 y 96 de la Ley 1437 de 2011, contra la misma no proceden recursos, ni revive los términos para demandar el acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la presente investigación administrativa.

Resolución No. 3066 del 10 de septiembre de 2025, por la cual se ordena de oficio una revocatoria directa 4767-2013

ARTÍCULO CUARTO: Se remita copia del presente acto administrativo a la Dirección Financiera - Oficina de Cobro coactivo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Diana M. Walteros A.

DIANA MARCELA WALTEROS ACERO
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

Proyectó: J. Florez
Revisó: Susana B.



Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud



INICIO

BUSCAR

REPORTES

PLANTILLAS

CONTRASEÑA

MI REPARTO

BITACORA

Investigación/Expediente

Búsqueda investigación/expediente

Datos de la investigación/expediente :::

Año expediente

2013 ▼

Número expediente

4767

Estado expediente

Seleccione... ▼

Estado expediente en Cobro Coactivo

Seleccionar... ▼

Área que origina el proceso

Seleccionar... ▼

Fecha de almacenamiento

Fecha de ejecutoria (dd/mm/aaaa)

Desde (dd/mm/aaaa)

Hasta (dd/mm/aaaa)

Datos del acta de visita :::

Datos del investigado/sancionado :::

Datos del acto administrativo :::

Ingreso/Salida

Bienvenido, Isguerrero

[Salir](#)

Área usuario

Dirección Financiera - Cobro
coactivo

Resumen

Manual usuario

[Manual de usuario](#)

Número del Radicado ::::

Número de Preliminar ::::

Buscar

Mostrar todos

Volver

Listado de investigaciones/expedientes

Número de registros encontrados: 1

	Cód. Exp.	Número Exp.	Año Exp.	Área origen	Área responsable	Fecha ejecutoria	Fecha caducidad	Sanción	T. Id.	Nro. Id.	Sancionado	Estado CC	Archivo?	Pago?	Capital	Interés	Saldo	
Sel...	4767	4767	2013	VSP	FIN	15/05/2015	14/08/2016	\$821.330,00	CC	17292430	EDUARDO MERCHAN ROJAS	T07-Expediente con terminación del proceso por parte del área generadora	SI	NO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	Resumen Detalle